



Consejo Económico y Social

Distr. general
28 de diciembre de 2022
Español
Original: inglés

Comisión de Desarrollo Social

61^{er} período de sesiones

6 a 15 de febrero de 2023

Tema 3 c) del programa provisional*

**Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social y del vigésimo cuarto
período extraordinario de sesiones de
la Asamblea General: nuevas cuestiones**

Respuesta a las repercusiones sociales de las crisis polifacéticas para lograr una recuperación más rápida de los efectos persistentes de la pandemia mediante la implementación integral de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Nota de la Secretaría

Resumen

De conformidad con la resolución 2006/18 del Consejo Económico y Social, la Comisión de Desarrollo Social ha incluido el tema “Nuevas cuestiones” en su programa de trabajo desde el ciclo normativo y de examen correspondiente a 2007-2008. El tema permite a la Comisión abordar cuestiones de actualidad que afectan al desarrollo social y requieren atención urgente y examinar nuevas cuestiones intersectoriales que van surgiendo a partir de la evolución de los problemas que dificultan el desarrollo en el mundo. La presente nota ofrece información sustantiva de antecedentes a la Comisión de Desarrollo Social sobre el tema elegido por la Mesa del 61^{er} período de sesiones de la Comisión: “Respuesta a las repercusiones sociales de las crisis polifacéticas para lograr una recuperación más rápida de los efectos persistentes de la pandemia mediante la implementación integral de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

En la nota se analizan las repercusiones sociales de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) a nivel individual y la interrelación entre unas y otras, los conflictos regionales en curso, el incesante cambio climático, las pesimistas perspectivas económicas en todo el mundo, además de las políticas y medidas que han adoptado los Estados Miembros para superar esos problemas mediante la

* E/CN.5/2023/1.



implementación integral de la Agenda 2030. En la nota, la Secretaría destaca que los Gobiernos ampliaron las políticas socioeconómicas de apoyo, por ejemplo para aumentar las prestaciones de protección social, introdujeron medidas fiscales y aprovecharon la tecnología digital. La Secretaría concluye que los Gobiernos deberían aprovechar la oportunidad que les brindan las iniciativas de recuperación para diseñar políticas y programas a medio y largo plazo tomando como referencia los éxitos cosechados y las lecciones aprendidas gracias a las medidas adoptadas a corto plazo. La Secretaría incide asimismo en la importancia de la cooperación y la solidaridad internacionales para hacer frente a los problemas polifacéticos que afectan en estos momentos al mundo entero.

I. Introducción

1. Los Estados Miembros, especialmente los países en desarrollo, siguen inmersos en las crisis sin precedentes provocadas por los efectos persistentes de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), estos a su vez agravados por las secuelas de la guerra en Ucrania, el incesante cambio climático y la desaceleración económica en todo el mundo. La coincidencia en el tiempo de esas crisis dificultó la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sobre todo en los países en desarrollo de ingreso bajo con escasos recursos, exacerbando las desigualdades y vulnerabilidades preexistentes, impidiendo cualquier avance en materia de desarrollo social e incluso invirtiendo las tendencias positivas en el ámbito de la erradicación de la pobreza y la reducción del hambre.

2. Pese a esos obstáculos, los países han tomado medidas proactivas para superar los problemas en un intento por acelerar la recuperación y el progreso en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Estados Miembros se han servido de sus políticas sociales para mitigar y superar el impacto socioeconómico negativo de la pandemia de COVID-19 conforme a sus necesidades y circunstancias nacionales. Muchas de esas iniciativas contemplaban medidas dirigidas a satisfacer las necesidades específicas de las personas más afectadas, entre ellas las mujeres, las personas de edad, los jóvenes, las personas con discapacidad, las personas que viven en la pobreza, los Pueblos Indígenas y las personas con empleos vulnerables que carecen de protección social.

3. A partir de la información que facilitaron los Estados Miembros en sus exámenes nacionales voluntarios de 2021 y 2022, en esta nota la Secretaría presenta una muestra representativa de las iniciativas nacionales adoptadas para afrontar las repercusiones sociales de las crisis polifacéticas con medidas concretas para ayudar a las personas en situación vulnerable, combatir la pobreza multidimensional y reducir el hambre y la inseguridad alimentaria; proteger el empleo y apoyar a las empresas para que la recuperación fuera inclusiva; aprovechar la tecnología digital en la educación y la salud pública; y superar los retos que planteaban la desaceleración económica, los conflictos y el cambio climático al mundo entero.

II. Las crisis polifacéticas y sus repercusiones sociales

A. La pandemia de COVID-19 y sus efectos persistentes siguen amplificando las repercusiones socioeconómicas negativas, especialmente en los países en desarrollo con menos recursos

4. En muchos países siguen observándose los efectos socioeconómicos adversos de la pandemia de COVID-19, que agravan la pobreza, el hambre y las desigualdades, lo cual les plantea más dificultades para recuperarse rápidamente e implementar la Agenda 2030. No han desaparecido los graves problemas que afectan a los sistemas de protección social y las finanzas públicas, especialmente en los países en desarrollo, y en el caso de los países endeudados de ingreso bajo, esos problemas se intensificaron, impidiendo que se cumplieran los Objetivos de Desarrollo Sostenible conexos.

5. La pandemia ha aumentado la presión que soportan los servicios sanitarios esenciales en todos los países y ha impedido avanzar en pos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud. Para lograr la recuperación inclusiva y sostenida, será necesario volver a invertir en los servicios y sistemas sanitarios existentes y poner en marcha iniciativas destinadas a implementar íntegramente los Objetivos en materia de salud.

6. Las repercusiones negativas persistentes de la COVID-19 no solo afectan a la salud pública. La pandemia ha provocado un aumento de la pobreza y la pobreza extrema. La tasa de pobreza extrema a nivel mundial (es decir, el porcentaje de la población que vive con menos de 1,90 dólares al día) aumentó del 8,3 % en 2019 al 9,2 % en 2020, en lugar de reducirse al 7,8 %, como se había pronosticado antes de la pandemia. Es la primera vez que la pobreza extrema aumenta desde 1998; se trata del mayor incremento registrado desde 1990, y sumió a otros 93 millones de personas en la pobreza extrema durante 2020. El retroceso en la reducción de la pobreza ha superado el promedio mundial en los países menos adelantados, ya que dependen en gran medida del turismo, las remesas y los flujos de capital procedentes del exterior para mantener el empleo y los ingresos. El progreso realizado para acabar con la pobreza extrema ha retrocedido tres o cuatro años a nivel mundial y ocho o nueve en los países de ingreso bajo¹.

7. La pandemia de COVID-19 también ha dificultado la distribución de insumos agrícolas, lo cual ha tenido un efecto perjudicial en la producción agrícola. También hubo problemas para distribuir productos agrícolas y alimentos, lo que agravó la inseguridad alimentaria, especialmente en los países pobres y entre las personas pobres. La capacidad de los países en desarrollo y las familias pobres para afrontar la inseguridad económica y alimentaria es más limitada. Para llegar a fin de mes, los hogares pobres se ven a menudo obligados a vender activos productivos o agotar sus ahorros. En esas familias, las consecuencias a largo plazo de la desnutrición y el hambre afectarán al desarrollo cognitivo y físico de la próxima generación. Eso agravará las desigualdades en lo que respecta a los resultados en materia de salud, nutrición y educación.

8. Los efectos desproporcionados de la pandemia de COVID-19 en las mujeres, los grupos sociales desfavorecidos y marginados y las personas en situación vulnerable han puesto de manifiesto y acentuado las desigualdades existentes. Las mujeres, los niños, los jóvenes, las personas de edad, las personas con discapacidad y los Pueblos Indígenas han tenido y siguen teniendo dificultades para sostener sus medios de vida y corren un mayor riesgo de sufrir la pobreza, el hambre, la exclusión social y la falta de hogar.

9. La educación también se ha visto perjudicada. El cierre de escuelas a causa de la pandemia de COVID-19 afectó a casi 1.600 millones de estudiantes en todo el mundo². Por breves que sean, las interrupciones en la escolarización de los niños tienen serios efectos negativos en su aprendizaje que pueden prolongarse en el tiempo y serán más pronunciados en los niños de hogares de renta baja. Pese a que las escuelas han vuelto a impartir clases presenciales, sigue siendo necesario hacer frente a las repercusiones negativas persistentes de la pandemia en el aprendizaje, dedicando especial atención a los niños que suelen quedarse más rezagados. De lo contrario, es posible que los efectos negativos de la pandemia a largo plazo en los hogares vulnerables y de renta baja y en los niños echen por tierra otros esfuerzos cuyo objetivo es impedir que la pobreza y la desigualdad se hereden de unas generaciones a otras.

¹ Véase <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/goal-01>.

² Véase <https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/covid-19-school-closures-fueled-big-learning-losses-especialmente-desfavorecidos>.

B. Los países en desarrollo y las personas pobres son los más afectados por el cambio climático y los desastres naturales

10. El cambio climático y el consiguiente aumento de los fenómenos meteorológicos extremos son algunos factores que explican el aumento del hambre, la inseguridad alimentaria y la mala nutrición en todo el mundo, dado que tales fenómenos pueden tener un efecto devastador para la pesca, la agricultura y la ganadería, o reducir la productividad en estos sectores. Otros efectos perjudiciales del clima para la salud son consecuencia de la contaminación atmosférica, las enfermedades, los fenómenos meteorológicos extremos, los desplazamientos forzados, las presiones sobre la salud mental y el aumento del hambre y la mala nutrición. Todos los años mueren unos 13 millones de personas a causa de factores ambientales, ya que los cambios en los sistemas meteorológicos están favoreciendo la propagación de enfermedades, y los fenómenos meteorológicos extremos aumentan el número de muertes y limitan la capacidad de los sistemas sanitarios para responder a las necesidades del momento³.

11. El cambio climático y la pobreza van de la mano de los conflictos, formando un círculo vicioso. La pobreza expone a las personas a mayores riesgos y limita su capacidad para soportar los efectos del cambio climático y los desastres naturales o provocados por el hombre. Al mismo tiempo, los efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria, y las pérdidas y daños que ocasiona, pueden aumentar y profundizar la pobreza. Ese círculo vicioso contribuye a agravar la desigualdad dentro de un país y entre unos países y otros. Aunque son los que menos contribuyen al cambio climático, pues generan menos de una décima parte de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, 74 de los países más pobres del mundo son los que más sufren las consecuencias del cambio climático, ya que en la última década han sufrido casi ocho veces más desastres naturales que en la década de 1980⁴.

C. Los países en desarrollo han quedado expuestos a las crisis de endeudamiento sucesivas debido a la desaceleración económica mundial y la escasez de apoyo financiero

12. Se esperaba que, una vez se hubiera superado la pandemia de COVID-19, la economía mundial se desacelerase en 2022 y 2023 debido a los efectos negativos persistentes de la pandemia y a la guerra en Ucrania, sumados a las rápidas subidas de los tipos de interés y a las restricciones fiscales adoptadas por las economías avanzadas. Se preveía que la economía mundial crecería un 3,1 % en 2022 y que la tasa de crecimiento sería la misma en 2023⁵. Ante la incertidumbre que suscita el conflicto de Ucrania y las nuevas subidas de los tipos de interés en los países desarrollados, también es posible que la desaceleración del crecimiento económico mundial sea mayor, e incluso que se entre en recesión.

13. La disminución de los ingresos tributarios y la elevada carga financiera de la deuda han complicado la recuperación de muchos países en desarrollo tras la pandemia de COVID-19, ya que su margen fiscal para poner en marcha los programas públicos necesarios para proteger a las personas y conservar puestos de trabajo ha

³ Véase www.un.org/es/climatechange/science/causes-effects-climate-change.

⁴ Véase <https://blogs.worldbank.org/climatechange/when-poverty-meets-climate-change-critical-challenge-demands-cross-cutting-solutions>.

⁵ Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, "Situación y perspectivas de la economía mundial a mediados de 2022" (E/2022/60), 18 de mayo de 2022. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo prevé una ligera desaceleración del crecimiento económico mundial en 2023 (véase <https://unctad.org/tdr2022>).

sido muy limitado, mientras que los países desarrollados han introducido medidas de estímulo equivalentes al 18 % de su producto interno bruto.

14. En un gran número de países en desarrollo, la crisis de la deuda se está agravando a consecuencia de la subida de los tipos de interés, la desaceleración de la economía mundial y la posibilidad de entrar en recesión, además de las consecuencias de la guerra en Ucrania. Antes de la guerra, tres de cada cinco países más pobres se enfrentaban a un alto riesgo de sobreendeudamiento o ya se habían endeudado en exceso, mientras que uno de cada cuatro países de ingreso mediano se enfrentaba a un alto riesgo de sumirse en una crisis fiscal. La subida de los precios de la energía y los alimentos aumentó la presión sobre el saldo fiscal y externo de los importadores de productos básicos. Muchos de esos países se vieron obligados a recortar el gasto en desarrollo, lo que redujo su capacidad para hacer frente a futuros choques. Las crisis de endeudamiento sucesivas limitan la capacidad de los países para realizar las inversiones necesarias en desarrollo sostenible, y esto se traduce en un aumento del 20 % de las necesidades de financiación no satisfechas en sectores fundamentales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible⁶.

D. Los conflictos lastran la recuperación tras la pandemia

15. El actual conflicto en Ucrania ha desencadenado una crisis humanitaria a gran escala. Ha dado lugar al aumento de los precios y la volatilidad de los mercados energéticos, así como a una considerable subida del precio de cereales, fertilizantes y otros productos agrícolas, especialmente los exportados por la Federación de Rusia y Ucrania, y ha agravado los problemas de suministro ocasionados por la pandemia y las dificultades financieras que atraviesan muchos países y hogares.

16. En 107 economías de todo el mundo, alrededor de 1.700 millones de personas viven gravemente expuestas a por lo menos una de las tres categorías de consecuencias del conflicto siguientes: la subida del precio de los alimentos, la subida del precio de la energía y el endurecimiento de las condiciones financieras⁷.

17. En el caso de los países en desarrollo que dependen de las importaciones para satisfacer la demanda de alimentos y energía de su población, la subida de los precios, la carga de la deuda y el aumento de los tipos de interés limitan la capacidad de los Gobiernos para capear los cambios en los mercados mundiales. En todos los países, el elevado precio de los alimentos y el combustible y el endurecimiento de las condiciones financieras se refuerzan mutuamente y contribuyen a crear un círculo vicioso de pobreza, hambre y desigualdad.

18. Todo ello ha frenado el crecimiento en muchas economías del mundo y en la mayoría de los países en desarrollo. Se prevé que los efectos combinados del impacto persistente de la pandemia y el conflicto en Ucrania sumirán a otros 75 y hasta 95 millones de personas en la pobreza extrema antes de que finalice 2022, en comparación con las proyecciones anteriores a la pandemia⁸.

⁶ Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, “The great finance divide”, nota de políticas núm. 134, 13 de junio de 2022.

⁷ Véase <https://news.un.org/pages/wp-content/uploads/2022/04/UN-GCRG-Brief-1.pdf>.

⁸ Véase <https://blogs.worldbank.org/opendata/pandemic-prices-and-poverty>.

III. Buenas prácticas en las políticas y estrategias de los Estados Miembros para afrontar el impacto negativo en el desarrollo social e implementar la Agenda 2030 en su integridad⁹

19. A pesar de los enormes desafíos que tienen ante sí, los Estados Miembros han tratado por todos los medios de afrontar las repercusiones sociales de estas crisis polifacéticas atendiendo a sus necesidades y situaciones particulares. Han seguido introduciendo políticas y programas prácticos de la mejor manera posible, gracias a lo cual se ha podido avanzar en muchos ámbitos.

A. Ampliar las políticas de apoyo social y económico para afrontar las repercusiones sociales inmediatas de la pandemia de COVID-19 y otras crisis

1. Ampliar las medidas de protección social para brindar más ayuda a las poblaciones vulnerables

20. Con objeto de brindar asistencia social a las personas vulnerables para que pudieran afrontar las repercusiones sociales y económicas de la COVID-19, un gran número de Gobiernos adoptaron medidas para transferir efectivo por medio de los programas de protección social existentes. En Angola, Argelia, el Camerún, Côte d'Ivoire, Egipto, Gambia, Lesotho, Liberia, Mozambique, Nigeria, el Sudán y Túnez, se han aumentado las transferencias en efectivo destinadas a los hogares pobres y vulnerables utilizando los programas de protección social que ya existían para proporcionar más prestaciones sociales (E/CN.5/2022/5). En Egipto, la iniciativa presidencial Ahalina concede un subsidio mensual de 500 libras egipcias (unos 31,77 dólares)¹⁰ a los trabajadores cuyos medios de subsistencia se vean gravemente afectados por la crisis. Ahalina es una iniciativa de asociación comunitaria que forma parte de los esfuerzos para ayudar a las familias de renta más baja y a los trabajadores informales afectados por la COVID-19. Malawi pagó una suma fija equivalente a cuatro meses en el marco del Programa de Transferencias Sociales en Efectivo, que está dirigido a los hogares rurales paupérrimos que tienen escasas posibilidades de encontrar trabajo.

21. En Kirguistán se puso en marcha la iniciativa Cash Plus para reforzar el programa nacional de transferencias en efectivo, lo cual permitió aumentar y diversificar la producción de alimentos e impulsar actividades generadoras de ingresos. Además de recibir pagos mensuales, las familias que suscribieron un contrato con arreglo al modelo Cash Plus percibieron distintas ayudas a la producción en función del perfil de cada beneficiario, teniendo en cuenta las condiciones agroambientales y las necesidades del mercado local. Gracias a este plan, el 74 % de los hogares beneficiarios aumentaron su productividad agrícola y el 90 % mejoraron la diversidad de su dieta y los resultados nutricionales.

22. También se ha ampliado la cobertura de los programas de protección social que ya existían seleccionando e inscribiendo a nuevos beneficiarios. En Nigeria, el Proyecto Nacional de Redes de Seguridad Social inscribió a nuevos hogares, que

⁹ A menos que se indique lo contrario en las notas a pie de página, todos los ejemplos de Estados Miembros que se describen en la presente nota proceden de los exámenes nacionales voluntarios presentados en los períodos de sesiones de 2021 y 2022 del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, disponibles en <https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/>.

¹⁰ Las equivalencias estimadas en dólares de los Estados Unidos son las vigentes en el momento de redactar el presente informe.

pasaron a tener derecho a la asistencia social regular y al socorro de emergencia por la COVID-19. La coherencia de las políticas mejoró gracias a la creación de un registro social nacional, y también a la coordinación, el perfeccionamiento y la integración de los programas de redes de seguridad social en los sistemas de protección social. En el Brasil, el programa Bolsa Família se ofreció a otros beneficiarios afectados por la pandemia de COVID-19. Los hogares que pueden acogerse al programa Bolsa Família reciben una transferencia mensual de dinero en función de los ingresos y la composición de cada hogar¹¹. El Perú introdujo el segundo Bono Familiar Universal para las familias que vivían en la pobreza. Se trata de un subsidio para familias en situación de pobreza o pobreza extrema en zonas urbanas y rurales, y constituye una medida de protección económica para los hogares vulnerables frente al impacto de la pandemia. En Finlandia, donde ya existía un sistema de protección social integral, ágil y sostenible antes de la crisis de la COVID-19, se introdujeron ajustes esenciales para responder a la crisis, la mayoría de ellos relacionados con la inseguridad alimentaria.

23. Para que las personas más vulnerables pudieran recibir atención sanitaria relacionada con la pandemia de COVID-19, los Gobiernos introdujeron ajustes en sus planes nacionales de seguros. Marruecos adaptó su Programa Nacional de Asistencia Médica, un plan de seguro médico no contributivo para hogares vulnerables que cubría al 20 % de la población, con el fin de compensar los ingresos perdidos durante los períodos de cuarentena. El programa también se amplió con el fin de incorporar a los trabajadores informales que habían perdido sus medios de subsistencia. Rwanda modificó su plan de seguro médico comunitario para dar más acceso a las personas pobres y eliminó el período de carencia entre la inscripción y el derecho a solicitar los servicios.

24. Algunos Gobiernos también introdujeron cambios en el marco legislativo para mejorar el funcionamiento de sus sistemas nacionales de protección social. Antigua y Barbuda promulgó la Ley de Protección Social para crear un marco institucional y administrativo más sólido. Se han creado un Consejo de Protección Social y una Comisión de Protección Social, con funciones y responsabilidades claras para mejorar la coordinación de los programas de protección social.

25. Para atender a un mayor número de personas vulnerables afectadas por las repercusiones sociales y económicas de la COVID-19, algunos Gobiernos recurrieron a tecnologías digitales para seleccionar e inscribir a nuevos beneficiarios y desembolsar las transferencias en efectivo. En Colombia, un nuevo requisito que exige que las personas tengan una cuenta bancaria en la que recibir la asistencia relacionada con la pandemia ha aumentado de manera exponencial el número de personas que abren cuentas de depósito por primera vez, gracias a la colaboración entre el sector público, los bancos y las empresas de tecnología financiera. El Pakistán se sirvió de plataformas digitales para crear programas dirigidos a los hogares más vulnerables en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 y 2. Los programas prevén, entre otras cosas, ampliar la cobertura sanitaria, empoderar a los jóvenes, conceder subsidios dirigidos exclusivamente a los agricultores y utilizar plataformas digitales. El Gobierno de Uganda puso en marcha su Registro Único Nacional para la Protección Social, que consistía en una plataforma centralizada en la que se almacenaba, analizaba y comunicaba la información común y esencial de los distintos programas de protección social en beneficio de todas las partes interesadas. Estas medidas adoptadas en respuesta a la pandemia podrían reportar ventajas a largo plazo, ya que han mejorado la inclusión financiera y social de las poblaciones marginadas.

¹¹ Véase <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/792901468770374532/brazil-bolsa-familia-project>.

26. Para ayudar a los grupos vulnerables a afrontar los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19, el Gobierno de Georgia ha aprobado un plan anticrisis para ayudar a la población en general y concedido ayudas específicas a las familias numerosas (con tres o más hijos), las personas con discapacidad y los estudiantes.

27. Se introdujeron medidas concretas para ayudar a las personas con discapacidad, porque este grupo ha estado más expuesto al riesgo de infectarse del virus y, por consiguiente, a experimentar dificultades económicas durante la pandemia de COVID-19. Para ayudar a las personas con discapacidad, Egipto creó chatbots que, con lengua de señas, evaluaban automáticamente los síntomas de la COVID-19 mediante la aplicación Wasel y el sitio web Tamkeen. Las personas con discapacidad auditiva también pueden utilizar la aplicación para comunicarse con el servicio de ambulancias, policía o bomberos enviando mensajes escritos a los agentes de atención al cliente, que responden a las preguntas de los usuarios a través de la aplicación.

28. Irlanda tiene previsto adoptar una serie de medidas de alivio para mejorar las ayudas destinadas a los grupos vulnerables durante la pandemia. Se planea formar un equipo de respuesta sobre la situación financiera de los hogares. Entre los integrantes del equipo habrá representantes de instituciones financieras, grupos de partes interesadas y la Defensoría del Deudor, una entidad parecida a la Oficina del Defensor de Deudores de Islandia. En Islandia, tras un pago único efectuado en 2020 a los beneficiarios de pensiones de invalidez y rehabilitación, se incorporaron a principios de 2021 cambios permanentes en el sistema de pensiones de invalidez, lo que aumentó las prestaciones de la seguridad social que recibían los beneficiarios de los niveles más bajos. Disminuirán las reducciones internas, y las personas que cobren pensiones por discapacidad de menor cuantía recibirán un complemento mensual cercano a las 8.000 coronas islandesas (unos 56 dólares), además del incremento correspondiente (del 3,6 %) previsto en la propuesta presupuestaria. Por tanto, al finalizar el año, el incremento total de las prestaciones de la seguridad social destinadas a estos pensionistas rondará las 20.000 coronas islandesas (unos 140 dólares).

29. La crisis de la COVID-19 puso de relieve la importancia de la vivienda para el bienestar de las personas. El Gobierno de Mongolia tomó medidas para aumentar gradualmente las prestaciones sociales destinadas a organizaciones, hogares y particulares pobres y vulnerables. La Oficina Nacional de Estadística de Mongolia está elaborando un índice nacional de pobreza multidimensional que permitirá determinar si una persona es pobre no solo en función de sus ingresos, sino también de otras dimensiones como la educación, las condiciones de vida o el estado de salud.

30. Dado que la pandemia de COVID-19 ha tenido consecuencias importantes para las familias, se introdujeron medidas de apoyo al respecto. La Federación de Rusia puso en marcha un “capital de maternidad” para proporcionar ayudas mensuales a las familias con más de tres hijos a fin de mejorar sus condiciones de vida, la educación de los niños, la adaptación social y la integración de los niños con discapacidad.

2. Medidas económicas para una recuperación inclusiva

31. Los Gobiernos adoptaron medidas económicas para ayudar a los sectores y las personas más afectados por los efectos de la pandemia de COVID-19. Argelia y Túnez aplazaron el pago del impuesto sobre la renta para aumentar el ingreso disponible de los hogares de renta baja. Algunos países redujeron los impuestos a la importación de productos básicos o exceptuaron su pago.

32. Se adoptaron medidas fiscales para facilitar la recuperación económica de los países en general tras la pandemia de COVID-19. Para ello, el Gobierno egipcio introdujo medidas de estímulo fiscal, incluidos préstamos dirigidos a sus ciudadanos.

33. Brunei Darussalam adoptó medidas provisionales de apoyo financiero para mitigar los efectos adversos de la COVID-19 en empresas y particulares y, al mismo tiempo, acelerar la recuperación económica. Para ayudar al sector privado, en particular a las microempresas y pequeñas y medianas empresas, y garantizar su viabilidad operativa, se concedió un aplazamiento de seis meses a los empleadores para que abonaran sus cuotas al Fondo Fiduciario de los Trabajadores y al Régimen de Pensiones Contributivas Complementarias de los empleados del sector privado que cobraban hasta 1.500 dólares de Brunei (cerca de 1.110 dólares) al mes en todos los sectores incluidos en la categoría de las microempresas y pequeñas y medianas empresas. El Gobierno ha financiado las cotizaciones al régimen de pensiones de los trabajadores autónomos durante el período indicado para garantizarles protección continua mediante el fondo de supervivencia.

34. Para movilizar los recursos financieros necesarios a fin de reconstruir para mejorar, en particular para fortalecer sus sistemas de protección social, Cabo Verde adoptó un enfoque multimodal y redefinió la prioridad de las partidas presupuestarias nacionales. El Gobierno suspendió la consolidación fiscal y la reducción de la deuda pública y modificó el presupuesto de 2020 para fortalecer el sistema nacional de salud hasta alcanzar el 5 % del gasto público.

35. Para aumentar el ingreso disponible de los hogares de renta baja, los Gobiernos de la República Democrática del Congo y Sudáfrica aplicaron exenciones temporales del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a los productos básicos. El Gobierno de Mozambique aplicó una exención temporal del IVA a medicamentos básicos y productos esenciales como el aceite para cocinar, el azúcar o el jabón. El Gobierno de Malí hizo otro tanto con las tarifas de electricidad y agua.

36. Para ayudar a las empresas a capear la pandemia de COVID-19, los Gobiernos ofrecieron apoyo sectorial. Egipto puso en marcha una iniciativa destinada a estimular el turismo interno, para lo cual bajó los precios de los pasajes aéreos de los vuelos locales que conectaban las ciudades turísticas como El Cairo, Luxor, Asuán, Sharm el-Sheikh, Taba, Hurghada, Marsa Alam y Alejandría.

37. Muchos países de ingreso bajo, cuyo presupuesto nacional está exigido en exceso, no pueden subsanar el déficit de financiación solo con movilizar recursos nacionales, y terminan recurriendo a la financiación externa. En Malawi, la puesta en marcha de un nuevo programa urbano de transferencias sociales por la COVID-19 (Iniciativa Urbana Gubernamental de Dinero en Efectivo), dependió por completo de la financiación externa, ya que el Gobierno debió destinar los recursos fiscales propios a las respuestas urgentes a la crisis en materia de salud y educación.

38. El Gobierno de México creó un mecanismo que facilitara el diálogo entre las partes interesadas para mitigar las repercusiones socioeconómicas de la COVID-19 y hacer frente a la pobreza, la desigualdad, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, y los problemas ambientales de una manera más integrada y en colaboración con una amplia gama de interesados. El mecanismo de gobernanza intersectorial está formado por 18 grupos de trabajo temáticos para facilitar el diálogo entre una amplia gama de instituciones del sector público, los organismos pertinentes de las Naciones Unidas y actores de la sociedad civil, entre ellos pequeños los agricultores, los agronegocios, los proveedores de alimentos, los organismos de comercialización, los consumidores y los organismos de reglamentación.

39. Para fomentar el desarrollo rural se introdujeron medidas centradas en la reforma agraria y el desarrollo rural. Filipinas ha elaborado un plan de acción nacional sobre la agricultura familiar, plan que se formuló mediante procesos con múltiples partes interesadas y comités nacionales en este ámbito. Gracias al plan de acción, el país ha definido las políticas y programas prioritarios que se deben poner en marcha,

incidiendo en la reforma agraria y el desarrollo rural, con el objetivo de garantizar el bienestar de los agricultores familiares e implicando a todos los organismos gubernamentales en el ámbito del desarrollo rural.

40. Sri Lanka destinó ayudas financieras a varios sectores, entre ellos las microempresas y pequeñas y medianas empresas, y el turismo. Estas facilidades se concedieron en dos ocasiones a empresas y particulares dedicados al sector turístico.

41. El Gobierno de Marruecos empezó a poner en práctica su hoja de ruta para la recuperación económica. El Rey de Marruecos anunció en julio de 2020 que, además de comprometerse con la reforma de las empresas de titularidad estatal, se había aprobado una ley en virtud de la cual se universalizaban los sistemas de protección social, como el seguro por enfermedad y las prestaciones familiares, a fin de garantizar el acceso de toda la población a los servicios de salud pública.

B. Otras medidas para mejorar las políticas de desarrollo sostenible

1. Políticas e iniciativas para reducir la pobreza multidimensional y el hambre

42. Para superar la pobreza, se adoptaron diversas políticas laborales y en materia de educación. Colombia destinó una inversión de 600 millones de dólares a ayudar a los jóvenes que vivían en la pobreza a seguir cursando sus estudios. Se destinaron otras inversiones a diferentes programas, entre ellos uno de carácter solidario basado en los ingresos, se introdujeron cambios en el tipo del IVA y se destinaron 200 millones de dólares a garantizar la seguridad alimentaria de los hogares vulnerables.

43. Para ayudar al sector informal, se adoptaron medidas específicas que permitieran a los hogares satisfacer sus necesidades básicas. La Argentina concedió a los trabajadores del sector informal un ingreso familiar de emergencia que ascendía a 10.000 pesos argentinos (unos 58 dólares, equivalentes al 59,3 % del salario mínimo). El Gobierno también puso en marcha un programa dirigido a los trabajadores esenciales para ayudar a los hogares a atender sus necesidades básicas con prestaciones por hijos a cargo y tarjetas de alimentos. En la Argentina, las cooperativas trabajan tanto con el Gobierno como con otros productores comerciales para ofrecer alimentos a precios asequibles.

44. Varios Gobiernos suspendieron algunas tasas e impuestos para ayudar a las personas vulnerables a lidiar con los efectos económicos y sociales de la pandemia de COVID-19. Algunos países, como el Camerún, Ghana, Kenya, Rwanda o Zambia, suspendieron temporalmente las comisiones por transferencias de dinero por teléfono móvil, que se utilizaban habitualmente para enviar remesas destinadas a sufragar gastos esenciales como los alimentos, los servicios médicos, la escolarización y la vivienda. Por ejemplo, el Gobierno de Zambia eximió del pago de comisiones por transferencias electrónicas de dinero entre particulares de hasta 150 kwachas zambianos (unos 8,34 dólares), gracias a lo cual esas transacciones pasaron a ser gratuitas. Los Gobiernos del Chad, Malí y Mauritania eximieron de impuestos la importación de alimentos y otros artículos de primera necesidad, con el fin de aumentar el ingreso disponible de los hogares de ingreso bajo.

45. El Gobierno de Guyana lleva a cabo múltiples iniciativas para diseñar programas de formación accesibles y gratuitos y ofrecer oportunidades de empoderamiento a las poblaciones más vulnerables (como las mujeres, los jóvenes, los desempleados y las personas con discapacidad) con miras a diseñar itinerarios que condujeran al empleo y el emprendimiento. Hay programas especializados para las personas con discapacidad que ofrecen, entre otras cosas, formación en tecnologías de la información y las comunicaciones, alfabetización funcional, confección de

prendas de vestir, agricultura sostenible y asesoramiento. Las mujeres y las niñas son las beneficiarias del programa de la Red de Innovación e Inversión de las Mujeres, que ofrece formación accesible, gratuita y sin prerequisites para que adquieran competencias empresariales.

46. Para reforzar el sector sanitario ante la pandemia de COVID-19, los Gobiernos han inyectado otros recursos importantes desde que comenzó la crisis. En Egipto, se aumentó en un 100 % la partida presupuestaria destinada al Ministerio de Salud y Población para el ejercicio 2020/21. El Gobierno también ha anulado las tarifas y subsidiado los seguros médicos para que las personas más vulnerables puedan acceder a la atención. Indonesia destinó al sector de la salud aproximadamente una quinta parte del paquete de estímulo que anunció en marzo de 2020. El país ofreció además tratamiento médico gratuito a todas las personas, inscritas o no en el plan nacional de seguro médico.

47. Para responder al aumento de los trastornos mentales provocado por la pandemia de COVID-19, los Gobiernos intensificaron el apoyo correspondiente. En Malasia, en colaboración con organismos gubernamentales, Mercy Malasia creó la Línea Telefónica de Primeros Auxilios Psicológicos. Además, en los centros de cuarentena y en los hospitales, se desplegaron equipos para prestar servicios de salud mental y apoyo psicológico a los enfermos de COVID-19 y el personal de salud. El Instituto Mexicano del Seguro Social mantiene servicios de consulta telefónica con especialistas en psicología y psiquiatría para ayudar a las personas que sufren angustia y depresión a causa de las medidas de confinamiento.

48. Ghana ha puesto en marcha una estrategia integral para promover la producción nacional de vacunas. Está previsto que la primera fase de la producción comercial arranque en enero de 2024.

2. Utilizar las tecnologías digitales y las políticas conexas en pro de la educación y de la salud pública

49. La pandemia de COVID-19 ha impulsado el crecimiento de la educación a distancia como fórmula para garantizar la continuidad del aprendizaje, y se han desarrollado tecnologías digitales para mejorar y ampliar la educación a distancia y construir sistemas educativos más abiertos, inclusivos y flexibles después de la pandemia. Qatar puso en funcionamiento una nueva plataforma de aprendizaje en línea (Mzeed) que ofreció a los estudiantes recursos digitales e interactivos, entre los que se contaban libros interactivos, libros de texto en formato PDF, video, audio y otros materiales de aprendizaje digital, así como la plataforma QLearning para facilitar y apoyar todos los servicios de aprendizaje a distancia.

50. La enseñanza a distancia ha impulsado las inversiones en conectividad escolar. En Burundi, desde que comenzó la crisis por la COVID-19, los niños de las zonas de difícil acceso han recibido tarjetas digitales seguras para teléfonos móviles que vienen precargadas con contenido de audio. Chipre ha invertido en aulas digitales y en los servicios de apoyo necesarios. La enseñanza a distancia obligó a mejorar la conectividad a Internet, crear aulas digitales y suministrar equipos y servicios de apoyo que permitieran ampliar el aprendizaje digital según fuera necesario durante la pandemia de COVID-19. Las tecnologías digitales también ayudaron a subsanar las desigualdades entre las zonas urbanas y las rurales en lo que respectaba a los logros educativos.

51. Para facilitar las clases a distancia, una necesidad impuesta por la COVID-19, los Gobiernos están instruyendo al personal docente, las madres y los padres y los estudiantes para ayudarlos a adaptarse a la enseñanza y el aprendizaje a distancia. En el Ecuador se creó una dependencia nacional de información (accesible por teléfono

y correo electrónico) para orientar al personal docente y a las madres y los padres, y también prestar apoyo psicológico a las madres, los padres y los estudiantes. Se ha creado una plataforma educativa nacional con más de 800 recursos pedagógicos y se recurre a los medios de comunicación tradicionales para difundir contenidos educativos, tanto por radio como por televisión. Un aula virtual permite impartir sesiones en línea a personas repartidas por todo el país.

52. Para que nadie se quedara atrás en el ámbito educativo, se introdujeron medidas que facilitaban el acceso de los grupos vulnerables a la educación. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia puso en marcha un programa educativo para la enseñanza de las lenguas habladas por los Pueblos Indígenas y así facilitar su integración.

53. Se introdujeron medidas dirigidas a los jóvenes para apoyar la educación ante los efectos negativos de la pandemia de COVID-19. A través del sistema nacional de la juventud (Sinajuve), el Brasil organizó cursos gratuitos de educación a distancia sobre temas como el emprendimiento y las finanzas personales.

54. También se recurrió a estrategias multimodales que combinaban el aprendizaje digital con formas más tradicionales de aprendizaje a distancia (televisión, radio y prensa). En Colombia, junto con Aprender Digital, plataforma nacional que ofrece más de 80.000 recursos digitales organizados por grado, el Gobierno está preparando un paquete de apoyo al aprendizaje en el hogar dirigido a las familias que carecen de conectividad y emitiendo programas educativos tanto en radio como en televisión para los alumnos de escuela primaria a media.

55. Los Gobiernos utilizaron herramientas digitales para ayudar a contener la propagación de la pandemia de COVID-19. En Bulgaria, una aplicación móvil permite al usuario comunicar a diario su estado de salud y un portal web ofrece datos epidemiológicos actualizados e información sobre las medidas adoptadas. Esta información permite diseñar un modelo estadístico más exacto, un elemento necesario para volver rápidamente a la normalidad. El Instituto Nacional de Estadística ha añadido una sección dedicada a la COVID-19 en su sitio web oficial que ofrece puntualmente información estadística sobre el impacto de la pandemia en la vida social y económica del país.

56. Para que las personas pudieran regresar a la normalidad, se utilizaron herramientas digitales que minimizaban los riesgos para la salud. En colaboración con la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, en Chipre se implantó una herramienta de evaluación de riesgos interactiva en línea para la COVID-19. El código sanitario que genera una aplicación de teléfono móvil se ha convertido en un pase para volver al trabajo y a la escuela y circular por el país.

57. La digitalización de los servicios sanitarios aumentó durante la crisis. En Dinamarca, se puso en marcha una iniciativa de digitalización estratégica, basada en la experiencia recabada durante la pandemia de COVID-19, cuyo objeto era aprovechar los nuevos recursos digitales para aumentar la resiliencia y la sostenibilidad del sistema de salud.

3. Políticas laborales para proteger el empleo y el bienestar de las personas: protección contra el desempleo y subsidios salariales

58. Para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19, los Gobiernos introdujeron cambios en la legislación laboral para ofrecer mayor protección a los trabajadores y seguridad de sus ingresos. La India publicó directrices que definían un nuevo marco regulador para las empresas que conectaban a conductores con pasajeros. Las medidas tienen como objetivo proteger a los pasajeros, formalizar la relación laboral de los trabajadores por encargo (conductores

en este caso) y mejorar la rendición de cuentas de las empresas de transporte privado de pasajeros. La aplicación de una tarifa fija por parte del Estado puede ofrecer seguridad en términos de ingresos a aquellos conductores que han de hacer frente a sus obligaciones de pago (las cuotas mensuales de los préstamos contratados para comprar un vehículo), a pesar de que sus ingresos son más limitados a consecuencia de la pandemia de COVID-19.

59. Se pusieron en marcha programas de mantenimiento del empleo para retener a los empleados pese a las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19. En la República de Corea, Singapur y Viet Nam, los subsidios salariales se dirigieron a sectores vulnerables concretos, a los trabajadores vulnerables o a los solicitantes de empleo. En otros casos, se desplegaron a escala nacional y cubrían todos o la mayoría de los sectores de la economía. El Gobierno de Lesotho pagó un subsidio salarial de tres meses a los trabajadores de las fábricas textiles. El programa de subsidios salariales para trabajadores industriales se ha estructurado para beneficiar a los grupos más vulnerables de trabajadores industriales cubiertos por la normativa del salario mínimo.

60. Al flexibilizar los criterios para optar al subsidio por trabajos de corta duración, Alemania consiguió evitar que el desempleo creciera de manera importante. Se ha recurrido a la jornada laboral reducida para compensar algunas pérdidas puntuales de ingresos e impedir la pérdida de puestos de trabajo. A finales de 2021, se aumentó el subsidio por jornada reducida hasta el 80 % del ingreso neto que los trabajadores hubieran dejado de percibir. El período máximo para disfrutar de este subsidio pasó de 12 a 24 meses, si bien finalizaba al término de 2021.

61. Para reconstruir el mercado laboral tras la COVID-19, la Argentina garantizó una renta básica a la población (la mitad del salario mínimo) al tiempo que incentivaba el empleo. El Gobierno también se propuso crear más oportunidades de empleo en las zonas rurales, así como en algunos sectores, como el de la construcción, el textil, el del reciclado, el de la producción de alimentos y el de la atención de la salud.

62. Para ayudar a los trabajadores despedidos a raíz de la COVID-19, los regímenes de seguro de desempleo proporcionaron rápidamente ingresos considerables. En China, la cobertura del seguro de desempleo se amplió temporalmente en 2020 para que pudieran recibir prestaciones los trabajadores migrantes desempleados que llevaban menos de un año asegurados.

63. En Azerbaiyán, se crearon puestos de trabajo remunerados en la administración pública para garantizar el empleo activo de las personas que tenían dificultades para conseguir otro tipo de empleo. Sierra Leona puso en marcha un proceso de contratación para rehabilitar 1.200 km de carreteras principales y secundarias con el que se preveía crear puestos de trabajo para los jóvenes y ayudar a conectar a los agricultores con los mercados. En Sudáfrica, el Programa Ampliado de Obras Públicas experimentó un fuerte aumento de la demanda durante la crisis y empleó a muchos sudafricanos vulnerables durante el confinamiento nacional. En Etiopía, Rwanda y Sudáfrica se suspendieron las obras públicas debido a la preocupación por las dificultades para que se respetara el distanciamiento físico, y los participantes recibieron su salario y transferencias para comprar alimentos como complemento salarial. En Kenya, el nuevo Programa Nacional de Higiene (Kazi Mtaani) ofreció oportunidades de empleo con un jornal a los jóvenes. Los participantes del programa se ocupaban, entre otras cosas, de limpiar calles y desagües, recoger basura, fumigar y desinfectar. El Gobierno de Mónaco ayudó a los progenitores únicos que tuvieran dificultades a causa de la COVID-19 ofreciéndoles garantías salariales.

64. Para ayudar a las pequeñas empresas y a los trabajadores autónomos a afrontar los efectos económicos de la pandemia de COVID-19, Eswatini ofreció reembolsar los impuestos a las pequeñas y medianas empresas que retuvieran a sus trabajadores

con el sueldo completo durante el confinamiento. En Namibia se concedieron subsidios a empresarios, trabajadores y ciudadanos de sectores muy afectados por la pandemia de COVID-19, como el turismo y la hostelería, la pesca, la construcción, las pequeñas y medianas empresas y el sector informal. Esto ha supuesto un alivio para las empresas formales e informales en algunos de los sectores más afectados. Se ayudó a las empresas, por ejemplo, reduciendo las tasas de interés, concediendo subsidios salariales y negociando moratorias de las deudas, así como prestando apoyo crediticio a empresas, trabajadores y hogares.

65. Para hacer frente al aumento de la tasa de desempleo provocado por la pandemia de COVID-19, el Gobierno de España ha introducido varias medidas de apoyo al empleo, entre ellas subvenciones a pequeñas y medianas empresas, y autónomos.

66. Para fomentar la contratación de trabajadores tras la pandemia de COVID-19, se adoptaron planes de creación de empleo para incentivar la contratación en las empresas. En Lituania, los subsidios a la contratación concedidos a los empleadores ayudaron a crear puestos de trabajo para las personas más vulnerables, como las personas con discapacidad, las personas mayores, los jóvenes y los desempleados poco cualificados o de larga duración. A partir de 2021, se devolverá a los empresarios el importe íntegro (100 %) del salario pagado a cada empleado durante los períodos de inactividad. El importe máximo que pueden recibir los empresarios podría ascender a 1,5 veces el salario mínimo mensual del trabajador, es decir, 963 euros (unos 1.027 dólares), siempre que esa suma no supere el salario fijado en el contrato de trabajo antes de declararse la segunda cuarentena.

4. Medidas concretas para ayudar a los grupos sociales más afectados por las crisis: mujeres, personas mayores, niños, personas con discapacidad y Pueblos Indígenas

67. En vista del efecto desproporcionado que ha tenido la pandemia de COVID-19 en las mujeres y las niñas, fue preciso adoptar otras medidas para integrar la perspectiva de género. El perfil de igualdad de género elaborado por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres sobre Liberia permitió analizar a fondo las diferencias en cuanto a las condiciones, necesidades, tasas de participación, acceso a los recursos y derechos a la propiedad, planificación del desarrollo y control de activos, y la capacidad decisoria de las niñas, las mujeres, los niños y los hombres en los roles de género asignados a unos y otras.

68. Para afrontar la pandemia de COVID-19, se tomaron varias medidas con perspectiva de género, como la de apoyar el trabajo de cuidados no remunerado, que aumentó durante la pandemia y recayó principalmente en las mujeres y las niñas. Esas medidas consistieron, entre otras cosas, en conceder licencias familiares con goce de sueldo, instituir programas de prestaciones en efectivo por el trabajo de cuidados, concertar acuerdos de horarios flexibles y reducidos, y ofrecer servicios ininterrumpidos de guardería. En Austria, el Gobierno amplió la licencia con goce de sueldo que concedía a las mujeres embarazadas que no podían trabajar a distancia durante la pandemia.

69. El Gobierno australiano ha tomado medidas para ayudar a la infancia, consciente de que las condiciones de vida inseguras, el estrés crónico de la pobreza y la ausencia de estímulos y oportunidades de aprendizaje suficientes en la primera infancia, circunstancias agravadas por la pandemia de COVID-19, pueden disminuir las probabilidades de que los niños tengan una vida fructífera de adultos. Las guarderías recibieron subsidios importantes cuando se puso en marcha el Paquete de Socorro a la Atención y Educación de la Primera Infancia.

70. También se han instituido medidas que favorecen a las personas mayores. En Bangladesh, las personas mayores han recibido ayuda mediante el subsidio por edad avanzada. El Brasil destinó más fondos a las instituciones dedicadas a los cuidados de larga duración para las personas mayores y mejoró las medidas de supervisión y rendición de cuentas.

71. En China, con la Estrategia de Revitalización Rural, que el Gobierno puso en marcha para promover medios de subsistencia sostenibles y el bienestar de las poblaciones rurales fomentando el desarrollo agrícola, el crédito rural total aumentó en un 17,8 % durante 2020.

72. Dado que los Pueblos Indígenas se han visto desproporcionadamente afectados por la pandemia de COVID-19, los subsidios de ayuda concedidos en los Estados Unidos de América para hacer frente a las vulnerabilidades de estos Pueblos durante la crisis consistieron, por ejemplo, en subsidios federales para financiar sus servicios y sistemas de salud, la vivienda y los programas de educación a todos los niveles.

73. El Gobierno de Cuba se centró en los grupos vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad, ofreciendo programas específicos como parte de sus políticas económicas y sociales en respuesta a la pandemia de COVID-19. El Gobierno de Trinidad y Tabago creó un micrositio dirigido exclusivamente a las personas con discapacidad.

C. Medidas de lucha contra la inseguridad alimentaria para ayudar a las personas más expuestas a los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19

74. Para mejorar la seguridad alimentaria y fomentar una dieta saludable, sobre todo durante la pandemia de COVID-19, la Argentina puso en marcha el Programa de la Tarjeta Alimentar, que forma parte del Plan Argentina contra el Hambre, gracias al cual los beneficiarios obtienen fondos para una canasta básica de alimentos mediante una tarjeta de débito. La canasta básica de alimentos mejora la seguridad alimentaria y fomenta una dieta saludable entre los niños, las embarazadas y las personas con discapacidad. Durante la crisis por la COVID-19, se duplicó el importe de la asistencia facilitada por el programa de mayo a diciembre de 2020, y posteriormente (desde febrero de 2021) se aumentó un 50 % más para responder a la subida de los precios de los alimentos.

75. Para garantizar la seguridad alimentaria durante la pandemia de COVID-19 a los niños que antes recibían una comida diaria en la escuela, Libia proporcionó raciones para llevar a casa en el marco de sus iniciativas de “alimentación escolar a domicilio”.

76. Para asegurar la seguridad alimentaria de los hogares durante la pandemia de COVID-19, el Programa de Ventas en el Mercado Libre de Bangladesh, con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, incorporó de manera oficial el arroz enriquecido para que los habitantes de las zonas urbanas pudieran comprar este producto por una cuarta parte de su precio original, y de este modo mejorar la seguridad alimentaria y el bienestar nutricional de los hogares vulnerables que consumían dietas deficientes en micronutrientes. Bhután construyó nuevos canales de riego y fomentó la agricultura comercial para mejorar la seguridad alimentaria nacional ante los problemas de abastecimiento adicionales que planteó la COVID-19 a una nación como la suya, sin salida al mar.

77. En la República Dominicana, el objetivo prioritario del Gobierno es garantizar el agua de riego para los cultivos y enseñar a los agricultores a utilizarla de manera eficiente. También se han introducido otras políticas para fomentar la agricultura familiar, promover la participación de las mujeres en la producción de alimentos,

apoyar a las cooperativas agrícolas y distribuir alimentos eficazmente a escuelas, hospitales, prisiones y centros infantiles. Por medio de un programa de crédito asistido, el Gobierno proporciona financiación destinada a tierras agrícolas e información de mercado en tiempo real. El Gobierno también está tratando de cambiar los hábitos de consumo y la dieta de la población.

78. Burkina Faso adoptó medidas de apoyo, como pagos en efectivo y en especie, para hacer frente a la inseguridad alimentaria provocada por las crisis agrícolas del período 2021/22 y las crisis nutricionales a largo plazo. Esas medidas han ido acompañadas de otras ayudas para los hogares vulnerables dirigidas a fomentar la agricultura local en zonas rurales.

79. Para afrontar la crisis alimentaria, es preciso contar con estrategias a largo plazo que faciliten la implantación de tecnologías modernas, prácticas agrícolas sostenibles y métodos agrotécnicos. Israel hizo especial hincapié en la tecnología agrícola innovadora como solución a la crisis alimentaria, y en la energía limpia para mitigar el cambio climático que amenazaba a los agricultores y los Estados insulares. Con sus programas agrícolas, la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (MASHAV) introduce tecnologías modernas y métodos agrotécnicos destinados a aumentar los niveles, la sostenibilidad y la calidad de la producción agrícola y, de ese modo, garantizar la seguridad alimentaria.

80. Para mejorar de manera sustancial el potencial productivo y garantizar la sostenibilidad de la agricultura, la silvicultura, la pesca y la industria alimentaria a través de la innovación, el Japón formuló su Estrategia para Lograr Sistemas Alimentarios Sostenibles, concretamente las Medidas para Lograr la Descarbonización y la Resiliencia con Innovación, como estrategia a medio y largo plazo para mejorar la participación de las partes interesadas en las distintas fases de las cadenas de suministro de alimentos y promover la innovación para reducir la carga ambiental. Esto será posible siempre que se desarrollen y difundan tecnologías innovadoras y el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca haga más verdes sus instrumentos de política. Las citadas Medidas constituyen un nuevo modelo de sistema alimentario sostenible en la región de los monzones asiáticos, cuyas condiciones climáticas y estructuras productivas son distintas a las de otras regiones, como Europa o América del Norte. El Ministerio tiene previsto compartir métodos y tecnologías aplicables a otros países de la región asiática de los monzones.

81. Para garantizar la seguridad alimentaria y la accesibilidad de los alimentos, Mongolia aprobó una amplia gama de leyes y políticas, entre ellas las relativas a la inocuidad de los alimentos y los productos alimentarios, además de los programas nacionales sobre alimentación sana. Mongolia definió varios objetivos en los documentos de política de desarrollo a medio y largo plazo, entre otros el de estabilizar el suministro y el acceso a los alimentos, mejorar la nutrición o garantizar la inocuidad de las materias primas y los productos en todas las fases de la cadena alimentaria.

D. Esfuerzos concertados para abordar las cuestiones transversales derivadas de la desaceleración económica mundial, los conflictos y otros problemas adicionales

82. En un esfuerzo por adaptarse al cambio climático, muchos países consideraron prioritaria la preparación para la reducción del riesgo de desastres, motivo por el cual adoptaron políticas concretas para mejorar la adaptación a las condiciones climáticas y tomaron medidas de sensibilización para educar e informar al público en general y a los jóvenes. Algunos países también trataron de frenar la degradación forestal adoptando estrategias y planes de acción para hacer frente al impacto ambiental del cambio climático.

83. Para cumplir la agenda del cambio climático, el Gobierno de Trinidad y Tabago procuró seleccionar a las comunidades vulnerables con objeto de diseñar y aplicar estrategias de adaptación eficaces que facilitarían una mayor resiliencia climática y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sin dejar a nadie atrás.

84. Para promover un sistema alimentario más sano y sostenible, la Unión Europea puso en marcha la estrategia De la Granja a la Mesa. La estrategia prevé varias iniciativas de carácter reglamentario y no reglamentario y utiliza las políticas comunes agrícola y pesquera como herramientas fundamentales para facilitar una transición justa a un sistema alimentario sostenible. Un sistema de estas características tendrá un impacto ambiental neutro o positivo, contribuirá a mitigar el cambio climático y adaptarse a sus consecuencias, revertirá la pérdida de biodiversidad y garantizará que todas las personas puedan obtener suficientes alimentos inocuos, nutritivos y sostenibles y que estos sigan siendo asequibles, al tiempo que generará beneficios económicos más justos, fomentará la competitividad del sector abastecedor de la Unión Europea y promoverá el comercio justo.

85. Una mayor colaboración entre los países en desarrollo, unida a la reforma de la arquitectura comercial y financiera multilateral, podría ayudar a encauzar la economía mundial en la dirección adecuada. Modelos alternativos de empresa como las cooperativas, además de las microempresas y pequeñas y medianas empresas, también pueden facilitar la transición a una senda de crecimiento más inclusiva, que genere más empleo y sea más ecológica. En Filipinas, un grupo dirigido por cooperativas trabajó con el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo para ayudar a las víctimas del tifón Odette en diciembre de 2021. La organización que agrupaba a las cooperativas de agricultores familiares firmó una orden de compra por valor de 18 millones de pesos filipinos (unos 375.000 dólares) con el Departamento para distribuir en tres días 25.000 paquetes familiares de alimentos (consistentes en 3.000 sacos de arroz y otros alimentos) a las víctimas del tifón Odette. Reconocidas como motores de creación de empleo, las microempresas y pequeñas y medianas empresas se han convertido en partes interesadas fundamentales para implementar la Agenda 2030. Los bancos para pequeñas y medianas empresas y los programas de financiación verde en el Estado Plurinacional de Bolivia, Chipre y Egipto han mejorado la resiliencia de las microempresas y pequeñas y medianas empresas y facilitado la innovación.

86. En Alemania, China y Malasia, el comercio electrónico y la digitalización se consideran vías fundamentales para mejorar la resiliencia de las microempresas y pequeñas y medianas empresas. En Cabo Verde, Colombia, Cuba, la República Democrática Popular Lao y Zimbabue, la formalización de tales empresas es uno de los objetivos de las iniciativas de estos países para impulsar la productividad y aprovechar las oportunidades que ofrecen los mecanismos de integración de los mercados regionales.

87. Las respuestas escalonadas para abordar los problemas alimentarios, energéticos y financieros desencadenados en el mundo entero por los conflictos ponen de relieve la importancia de que todas las personas puedan acceder a la energía. Mientras Cabo Verde, China, Chequia, Dinamarca, Indonesia, Noruega, Tailandia y el Uruguay documentaron avances en el acceso a la energía a pesar de los efectos negativos de las crisis internacionales, el Afganistán, Angola, Namibia y Túnez mencionaron los problemas relacionados con la energía que afectaban a una parte de su población. Cabo Verde indicó que había avanzado notablemente para facilitar el acceso a la energía de toda la población y explicó que quienes no disfrutaban del acceso necesario eran, en su mayoría, los habitantes de zonas remotas del país. Gracias a sus grandes redes eléctricas, las zonas rurales de China tienen ahora acceso a un suministro estable y fiable. En Túnez, el acceso a la energía para la población de renta baja y media se

ve dificultado por los precios de la energía a nivel interno, lo cual, sumado a un aumento de la pobreza en general, ha afectado a muchas personas.

88. Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Chequia, Chipre, Dinamarca, las Islas Marshall, Malasia, México, Nicaragua, Noruega, Qatar, Suecia, Tailandia y Túnez destacaron la importancia de la eficiencia energética para contribuir a la acción climática. Con su Plan Maestro de Red Eléctrica Inteligente, Tailandia pretende utilizar la electricidad de forma más eficiente gestionando mejor el consumo en hogares y establecimientos comerciales e industriales. La iniciativa incluye además un sistema de previsión eléctrica vinculado al consumo de energías renovables.

89. Muchos países documentaron soluciones basadas en la energía solar, una de las fuentes de energía renovable, para mejorar el acceso a la energía limpia y acelerar la acción climática. El Gobierno de Antigua y Barbuda puso en marcha en 2018 un proyecto consistente en acondicionar edificios públicos, hospitales, escuelas y aparcamientos dotándolos de sistemas solares y eólicos. Se calcula que esa iniciativa permitirá satisfacer un 10 % de la demanda energética de la nación isleña. Por otra parte, Antigua y Barbuda ha recurrido a la energía solar, entre otras cosas, para recuperarse tras el huracán Irma, de 2017, e instaló una planta solar en un esfuerzo por reconstruir para mejorar. La República Popular Democrática de Corea también promovió la introducción de la tecnología solar.

IV. Conclusiones

90. La COVID-19 y otras crisis actuales siguen planteando trabas al desarrollo social y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Países de todo el mundo han adoptado diversas medidas de políticas en numerosos frentes para superar el efecto adverso de estas crisis polifacéticas e interconectadas. Esas medidas han dado resultados, cuando menos, a corto plazo, sirviendo de base para acelerar la recuperación e implementar la Agenda 2030 en su integridad, sin que nadie se quede atrás. No obstante, los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19, los conflictos regionales en curso, el incesante cambio climático y las pesimistas previsiones económicas a nivel mundial limitan más aún el margen de políticas. Para recuperarse de manera inclusiva lo antes posible y regresar a la senda que permita implementar la Agenda 2030 en su integridad, es urgente aunar esfuerzos y garantizar la coherencia de las políticas para afrontar los inéditos retos actuales y avanzar hacia un futuro más seguro, ecológico y resiliente para todos.

91. Los países deben aprovechar la oportunidad que les brindan sus iniciativas de recuperación de las crisis polifacéticas para reforzar sus perspectivas de políticas a medio y largo plazo, teniendo presentes los éxitos y las lecciones aprendidas gracias a las medidas adoptadas para responder a las crisis en el corto plazo. En particular, para acelerar la recuperación inclusiva y retomar la senda que permita implementar la Agenda 2030, los países tienen que ampliar y afianzar los sistemas y las redes de protección social, convirtiendo algunas medidas de protección social de emergencia en elementos constitutivos de los niveles mínimos de protección social a nivel nacional, dependiendo de las circunstancias de cada país y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto mejorará la capacidad de los países y sus habitantes para hacer frente a futuras crisis y acelerar el progreso sostenido en pos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial.

92. Dada la interrelación existente entre problemas transversales como la seguridad energética, la seguridad alimentaria o la mitigación del cambio climático, la recuperación de la pandemia brinda a los países una oportunidad crucial de incorporar las medidas de lucha contra el cambio climático y de protección ambiental a sus planes de acción nacional. La transición a una energía más verde reducirá la

dependencia de los combustibles fósiles importados y acercará a los países al objetivo de la neutralidad en carbono, además de contribuir a la disminución de la pobreza y la desigualdad.

93. También se pueden adoptar algunas buenas prácticas para seguir avanzando en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como en la participación activa de los jóvenes, las personas mayores, las personas con discapacidad y los Pueblos Indígenas. Hay que integrar la perspectiva de género y la atención a las necesidades de los grupos sociales desfavorecidos y las personas vulnerables en las estrategias y los procesos de formulación de políticas, pues de ese modo la recuperación será inclusiva y sostenible, y la Agenda 2030 se implementará en su integridad, sin que nadie se quede atrás.

94. Los problemas globales requieren soluciones globales. La cooperación y la solidaridad internacionales y la acción multilateral son indispensables para avanzar, sobre todo en los países en situaciones especiales. Los países más rezagados no pueden afrontar las repercusiones socioeconómicas, polifacéticas e interrelacionadas de las crisis actuales sin ayuda internacional y sin contar con un entorno pacífico que les permita recuperarse de forma inclusiva y transformadora y aplicar con éxito sus estrategias nacionales de desarrollo.
